

MUJERES Y ENERGÍA



31 GRUPO SOBRE POLÍTICA FISCAL Y DESARROLLO

Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – CEDLA / Grupo sobre
Política Fiscal y Desarrollo – GPFD

Mujeres y energía / Silvia Molina / CEDLA

Nº 31 / Junio 2020 / La Paz, Bolivia

Serie: Grupo Sobre Política Fiscal y Desarrollo / CEDLA 2020

CEDLA (Ed.) 2020, 32 p.

I. t.
II. s.

DESCRIPTORES TEMÁTICOS

<ENERGIA> <POLÍTICAS ENERGÉTICAS> <MATRIZ ENERGÉTICA> <POBREZA> <ROLES
DE GÉNERO> <POLÍTICAS PÚBLICAS> <DERECHOS HUMANOS> <IMPACTOS MODELO
ENERGÉTICO> <HIDROELECTRICAS> <MILITARIZACIÓN> <CAMBIO CLIMÁTICO> <COCINAS
SOLARES> <ECONOMIA LOCAL>

DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS

<BOLIVIA> <BRASIL> <GUATEMALA> <COLOMBIA> <HAITI> <REPUBLICA DOMINICANA>
<AMÉRICA LATINA> <CARIBE>

Director Ejecutivo:

Javier Gómez Aguilar

Coordinación de Investigación:

Unidad de Políticas Públicas - CEDLA

Autor:

Silvia Molina

Producción Editorial:

Unidad de Comunicación y Gestión de Información - CEDLA

Diseño y armado:

Jousseline Virreira

Fotografía Tapa:

HRD Memorial, Hecho en Cali, Cedib y Página Siete.

Impresión:

Editorial CEDLA:

Achumani, Calle 11 N° 100

Entre García Lanza y Alexander

Telfs. 2794740 / 2799848

Grupo sobre Política Fiscal y Desarrollo - GPFD

E-mail: gspfyd@cedla.org

URL: <https://cedla.org/pdyf>

Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario - CEDLA

E-mail: info@cedla.org

URL: www.cedla.org

La Paz – Bolivia

Esta publicación fue elaborada por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario - CEDLA y cuenta con el valioso apoyo de Christian Aid, en el marco del Proyecto: "Mujeres y Energía" y la Embajada de Suecia, en el marco del Programa: "CEDLA, Enhanced Knowledge for Action: MPDA and the Sustainable Use of Natural resources".

Las opiniones y orientación presentadas son de exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente son compartidas por las instituciones y/o agencias que han apoyado este trabajo.

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de tapa, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, sin permiso previo del editor.

Con el apoyo de:



Suecia
Sverige



Fotos de portada

Nicinha (Brasil) (Movimiento de afectados por represas)

Nilce Souza Magalhães, asesinada el 2016, era líder del Movimiento de Afectados por Represas (MAB) de Rondonia, denunciaba y presionaba por la reubicación de las familias de la comunidad de Abuna a un lugar seguro y por la reparación de los daños a las familias de pescadores tradicionales y agroextractivistas afectadas del río Madera, por las centrales hidroeléctricas Jirau y Santo Antonio.

Ruth Alipaz (Bolivia) - CONTIOCAP

Ruth Alipaz Cuqui. Líder indígena de la comunidad amazónica de San José de Uchupiamonas, representante de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquivey que luchan contra las centrales hidroeléctricas en la Amazonia boliviana y en especial contra los proyectos Bala y Chepete. Es líder de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas, CONTIOCAP.

Isabel Zuleta (Colombia) - Ríos Vivos Antioquia

Isabel Cristina Zuleta es socióloga de la Universidad de Antioquia y activista, líder, fundadora del movimiento Ríos Vivos Antioquia que desde sus inicios se opone al proyecto Hidroituango.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	5
MUJERES Y ENERGÍA	
INTRODUCCIÓN	7
CONTEXTO REGIONAL.....	7
Políticas energéticas en ALC: realidades de la energía	8
Energía, pobreza y roles de género: el enfoque desde el acceso al servicio.....	9
El sector extractivo y las mujeres	11
<i>Políticas públicas, energía y mujeres.....</i>	11
EXPERIENCIAS, AVANCES Y LOGROS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE	12
Experiencias organización y formas de luchas de comunidades afectadas por megaproyectos	13
<i>Caso Bolivia y región ALC: Derechos humanos y megaproyectos. “De la formación, a la organización y acciones de resistencia”</i>	13
<i>Caso Brasil: Mujeres conscientes de su rol político frente a los impactos del modelo energético sobre las comunidades y su vida: “Arpilleras bordando la resistencia”</i>	16
<i>Caso Guatemala: Hacer frente a las grandes centrales hidroeléctricas, reflejo de la militarización de territorios, con alternativas locales como micro centrales comunitarias</i>	18
<i>Caso Colombia: Hidroituango. Inundar la historia para exportar electricidad: militarización, sueños de desarrollo y catástrofe</i>	20
<i>Casos Haití y República Dominicana: Promoviendo políticas y prácticas ambientales sostenibles y acciones para la adaptación al cambio climático en regiones de la frontera Haití-República Dominicana</i>	21

<i>Caso Bolivia:</i>	
<i>Cocinas solares, hornos secadores solares y otros</i>	
<i>proyectos de energía renovable para beneficio de</i>	
<i>comunidades y familias y para promover la actividad económica local</i>	23
CONCLUSIÓN.....	24
ANEXO	
LINEAS DE ACCION PREDOMINANTES EN EL SECTOR ENERGÉTICO RELACIONADAS CON	
MUJERES	26
Eficiencia Energética	26
Energía, derechos humanos y empoderamiento de sectores vulnerables	27
Energía y buen gobierno: Transparencia, salvaguardas, gestión social y ambiental	28
BIBLIOGRAFÍA.....	30

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1:	
Estructura del consumo energético de América del Sur (2014)	9
Gráfico 2:	
Estructura del consumo energético de América Central (2015).....	10
Gráfico 3:	
Estructura del consumo energético del Caribe (2015)	10

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1:	
Informe Curso Latinoamericano de Derechos Económicos,	
Sociales, Culturales y Ambientales DESCA 2018. Programa	
Urbano, UNITAS, CEDLA (2018)	13
Ilustración 2:	
Informe Curso Latinoamericano de Derechos	
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales	
DESCA 2018. Programa Urbano, UNITAS, CEDLA (2018)	14

Ilustración 3:	
En Brasil Las agujas dan poder. Inspiration (2015)	17
Ilustración 4:	
Christian Aid	24

Presentación

El análisis y desarrollo de casos que, mediante la investigación de Silvia Molina, el CEDLA presenta en este trigésimo primer número de la serie Grupo sobre Política Fiscal y Desarrollo, evidencia y concluye que bajo el actual modelo de desarrollo capitalista la forma de reproducción material de la sociedad es un proceso continuo de explotación que —en una dinámica insostenible— impone relaciones de poder y de dominación, sobre todo para las mujeres de la región latinoamericana y del Caribe.

Verifica también la tendencia, desde los estados, instituciones financieras y otros actores, a evadir la realidad y, en general, no enfrentar sus intervenciones, pese a que es necesario un cambio estructural de la sociedad para eliminar las estructuras que discriminan a la mujer.

No obstante que prevalecen en la agenda del desarrollo programas que señalan como destinatario final a las mujeres, los proyectos que surgen en ese marco, en busca de mejorar condiciones de acceso a servicios, condiciones de salud y/o mejores ingresos para las familias, pueden significar ciertas mejoras en las condiciones de vida de las mujeres y las familias.

Sin embargo, el estudio encontró que dan escasas respuestas a la necesidad de un “empoderamiento real” de las mujeres, que les permita aumentar su potencial para la movilización, participación política y capacidad de adoptar papeles activos en la comunidad superando roles de género preestablecidos.

Con base en Rafia Zakara, sobre el modelo original de “empoderamiento de las mujeres”, la autora requiere que se deje de reducir a la mujer a su condición de víctima: la sobreviviente de una violación, la viuda de guerra, la niña novia, etc.

Urge, por tanto, que las intervenciones sean definidas a partir de las demandas y necesidades locales, con prioridad al acceso a recursos naturales para la vida de las comunidades e impulso a la organización social y participación plena de las mujeres en las decisiones. Eso implica no sólo transformar las formas de producción sino, más bien, la transformación de las relaciones sociales de dominación y explotación.

Javier Gomez Aguilar
**Director Ejecutivo
del CEDLA**

Mujeres y energía

Silvia Molina

INTRODUCCIÓN

Este estudio está centrado en el marco de las desigualdades, efectos diferenciados y vulnerabilidad que enfrentan las mujeres en relación al acceso a la energía en países de América Latina y El Caribe.

Para este fin, se consideraron la realidad de las matrices energéticas en la región, los modelos de inversión predominantes y el contexto en el que se desarrollan algunas experiencias vinculadas con el sector de energía, de diversas organizaciones sociales y no gubernamentales, con el fin de conocer los resultados e impactos logrados e identificar componentes que permitan analizar el alcance de estas intervenciones frente a realidades locales y regionales.

Pretende ser un instrumento de apoyo para la discusión de políticas públicas y lineamientos estratégicos que impulsen el desarrollo de capacidades de movimientos sociales, organizaciones territoriales y, en particular, de las mujeres afectadas por megaproyectos.

La presente investigación abarca dos partes: la primera presenta el contexto regional, con énfasis en las políticas energéticas y la realidad de la matriz energética regional, revisando las relaciones entre energía, pobreza y su segunda, refiere a siete experiencias de proyectos y/o casos que tienen que ver con el sector energético en relación a procesos de formación, organización, luchas, y avances o logros, como también los profundos retos a los que

se enfrentan las comunidades y pueblos en América Latina y el Caribe, y en especial las mujeres.

CONTEXTO REGIONAL

Políticas y acciones que impulsan la extracción de recursos naturales y la expansión de la frontera extractiva, minera, petrolera, gasífera, ganadera y agroindustrial entre otros tipos, han sido una tendencia global en la que América Latina y El Caribe (ALC) han ocupado y siguen ocupando un lugar destacado.

El desarrollo del capitalismo y el ideal de modernidad han profundizado y diversificado todas las formas de explotación de las personas y de la naturaleza. El territorio se ha convertido en un espacio en disputa, donde la intensidad de la presencia del capital en la actividad extractiva e infraestructura relacionada, transforma la tenencia de la tierra, el acceso a recursos naturales, la estructura productiva y económica local, las prácticas sociales y culturales, así como la cotidianidad y la reproducción de la vida.

El capital impone nuevas relaciones de poder, transformando el territorio en función a las necesidades e intereses empresariales, financieros y de élites que ejercen gran poder político. Los proyectos de minería, infraestructura y energía, al transformar los territorios, también modifican las relaciones de género construidas en estos y alteran las relaciones de poder y generan violen-

Políticas y acciones que impulsan la extracción de recursos naturales y la expansión de la frontera extractiva, minera, petrolera, gasífera, ganadera y agroindustrial entre otros tipos, han sido una tendencia global en la que América Latina y El Caribe (ALC) han ocupado y siguen ocupando un lugar destacado

cia, resultado de las nuevas formas de producción y acceso al territorio, configurando un escenario de mayor desigualdad y vulnerabilidad, y acentuando lógicas compactas de dos sistemas de dominación: el patriarcal y capitalista.

Políticas energéticas en ALC: realidades de la energía

La dinámica del capitalismo en el sector energético en América Latina y el Caribe

está ligada al circuito de incentivos al consumo, producción, búsqueda de fuentes de origen fósil y, en los últimos años, nuevo impulso a la industria hidroeléctrica de gran escala.

El sector energético mantiene su rol estratégico como principal fuente de recursos económicos para los países productores y gran demandante de recursos financieros para países importadores, e impulsa la explotación de mayores y nuevas fuentes de energía, así como el incremento del volumen de producción y de generación de electricidad.

Al mismo tiempo, es esencial para la satisfacción de las necesidades y demandas de la industria de explotación intensiva de otras materias primas.

En ese escenario, las matrices energéticas de América del Sur, América Central y el Caribe, presentan características diferentes:

En términos de consumo, la estructura por fuente destaca la gran dependencia de combustibles fósiles de la región del Caribe.

En cuanto a la estructura por sector, las diferencias son mayores entre las tres subregio-

nes; en los casos caribeño y sudamericano, el sector residencial que consume 15% y 16% respectivamente, no es el preponderante y se encuentra por debajo del consumo de los sectores de transporte e industria. En Centro América, al contrario, el consumo residencial es el preponderante y está por encima del transporte y la industria.

La producción primaria de energía en Sudamérica es fundamentalmente “fósil” (petróleo, gas natural y carbón mineral), alcanzando 77% del total al 2014, con una baja producción de energías renovables¹.

La región se autoabastece en energía y consume el 87% de la energía primaria que produce, pero al interior, ningún país se autoabastece.

El consumo final de energía en la región sudamericana creció a un ritmo anual de 2,89% en la última década². La demanda y el uso principal es el transporte con casi el 40% del consumo total y con un crecimiento de 3,38% al año. Le sigue el sector industrial, con 33,6% y, de lejos, el sector doméstico o residencial con 15,7% (Guzmán, 2017³).

En términos de electricidad, en Sudamérica sólo el 42% de la energía introducida en las centrales proviene de fuentes renovables, es decir 447 millones de barriles equivalentes de petróleo (Mbep), cifra que incluye la hidroenergía generada por las centrales hidroeléctricas de pasada⁴ en las montañas de Los Andes y las represas de los llanos (Guzmán, 2017), (gráfico 1).

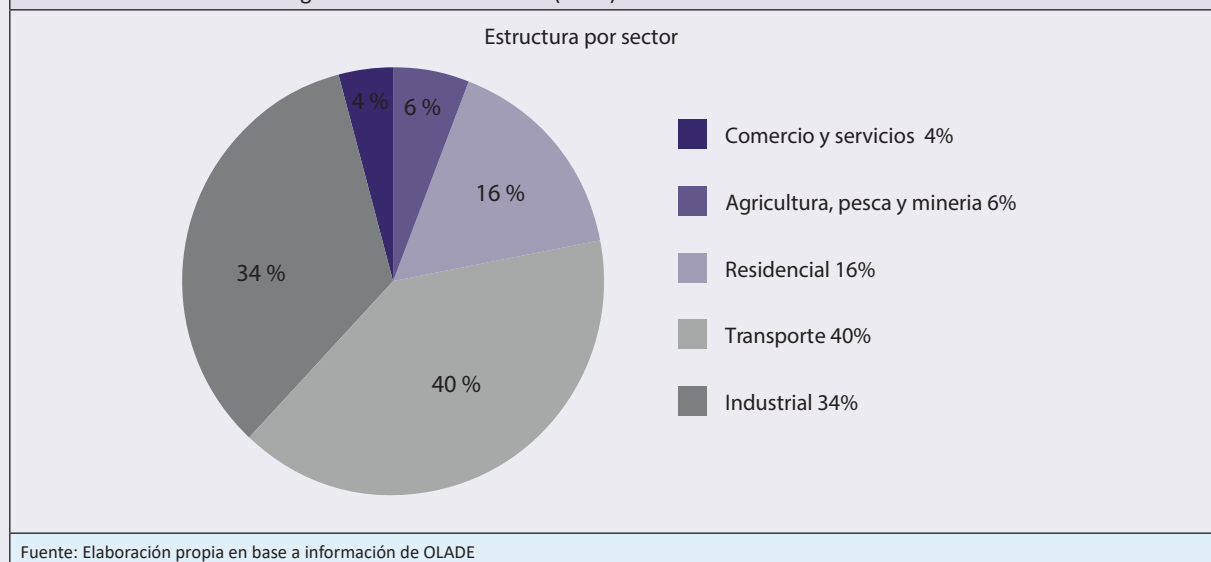
1 Se incluye la energía hidráulica producida en regiones de llanura, cuestionada por los impactos sociales, económicos, ambientales y climáticos que produce.

2 La información se basa en los balances energéticos de OLADE para el período 2000 a 2014.

3 Guzmán J.C, Molina S. CEDLA (2017): Discursos y realidades: Matriz energética, políticas e integración.

4 Se conoce como centrales hidroeléctricas “de pasada” a aquellos sistemas que no requieren volúmenes de almacenamiento de agua mayores al balance hídrico diario o una simple cámara de agua.

Gráfico 1
Estructura del consumo energético de América del Sur (2014)



La generación eléctrica en América Central se sostiene principalmente por la hidroenergía y los derivados de petróleo, aunque también destacan el uso del carbón mineral y la geotermia.

En el consumo de energía, el sector más importante es el residencial (40%), seguido por el transporte (35%) y el industrial (15%). En cuanto a las fuentes de mayor consumo, si bien los hidrocarburos se encuentran en primer lugar (48%), es notable el alto consumo de biomasa convencional, específicamente, leña, con cerca de 40% del total⁵ (gráfico 2).

Los hidrocarburos juegan un papel preponderante en el sistema de generación eléctrica de la región caribeña. Los productos petroleros y el gas natural representaron alrededor del 90% de la capacidad instalada y de generación de energía en el año 2015. El carbón mineral, la hidroenergía y las fuentes renovables no convencionales, complementan la matriz con una participación minoritaria.

En cuanto al consumo, en el Caribe destacan los

sectores industriales (37%), transporte (18%) y residencial (15%), los cuales demandan derivados de petróleo, gas natural y biomasa como principales fuentes (gráfico 3).

Energía, pobreza y roles de género: el enfoque desde el acceso al servicio

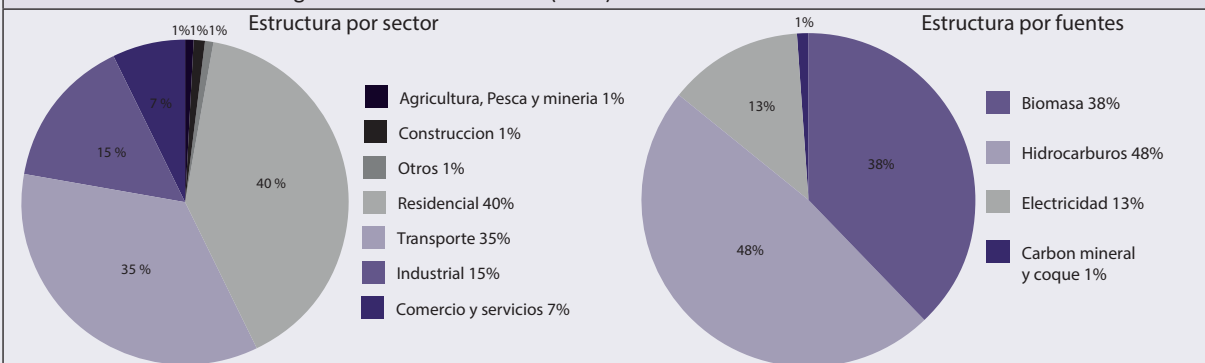
La pobreza en general y la pobreza energética en particular, afectan en mayor medida a las mujeres tanto en su salud, esfuerzo y tiempo, limitando sus capacidades para participar en actividades educativas, de desarrollo personal y de generación de ingresos. Sin embargo, enfrentar los problemas del desarrollo energético únicamente desde el enfoque de acceso a la energía, no resuelve las causas materiales de la pobreza y desigualdad.

Los conceptos de “pobreza energética”, vinculados al suministro de energía a los hogares⁶ y “feminización de la pobreza”, que en muchos casos definen políticas públicas y otras intervenciones, no llegan a evidenciar plenamente los efectos diferenciados de las restricciones de acceso a los

5 CEPAL, OLADE, BID (2017): *Eficiencia Energética en Latino América y el Caribe: Avances y oportunidades*.

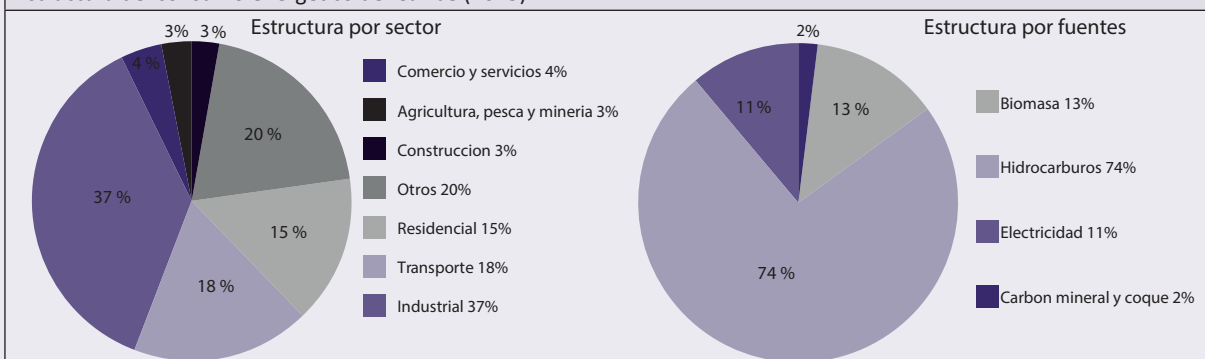
6 Si bien no hay consenso del alcance del concepto, algunos indicadores lo definen: nivel de ingresos; acceso a energía, eficiencia energética e impacto en el presupuesto familiar.

Gráfico 2
Estructura del consumo energético de América Central (2015)



Fuente: Elaboración propia en base a información OLADE -SIELAC, 2017.

Gráfico 3
Estructura del consumo energético del Caribe (2015)



Fuente: Elaboración propia en base a información OLADE -SIELAC, 2017.

suministros básicos de la población vulnerable —mujeres, niños y niñas—. Tampoco expresan la relación de este enfoque con el mantenimiento y/o posibilidad de superación de roles dentro de las familias, y menos aún consideran en su análisis la relación con las causas estructurales de la pobreza vinculadas al modelo primario-exportador, la situación de desigualdad de las mujeres en el mercado de trabajo y una visión de sociedad en que las tendencias hetero patriarcales siguen siendo dominantes.

La “Feminización de la pobreza”, desde sus primeras concepciones en los años 70, en referencia al incremento de hogares encabezados por mujeres en Estados Unidos y la correlación con el deterioro de las condiciones de vida y pobreza por ingresos, es actualmente usado de manera general para referirse al creciente empo-

brecimiento de las mujeres y la vulneración de derechos fundamentales.

Un trabajo realizado por el Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) resume los contenidos más comúnmente utilizados como feminización de la pobreza:

- Un predominio de mujeres entre los pobres;
- El impacto no fortuito, con sesgo de género, de las causas de la pobreza;
- El reconocimiento de una tendencia direccional, en la cual, la representación desproporcionada de las mujeres entre los pobres, está aumentando progresivamente (en este sentido, la feminización de la pobreza es un proceso, no simplemente un estado de cosas en una coyuntura particular);
- El grado de visibilidad de la pobreza femenina.

Por tanto, como lo expresa Aguilar, “en la medida que la unidad de análisis de los estudios e investigaciones son los hogares, no se consideran las reglas que rigen la distribución interna en una unidad doméstica, y que varían ampliamente según sociedades y culturas”⁷.

El sector extractivo y las mujeres

Es aceptado por instituciones de desarrollo que los resultados en la disparidad de género de los sectores de extracción se deben en gran medida a la intensidad de capital; dominación masculina en términos de decisiones, planificación, empleo calificado, búsqueda de beneficios y disminuida participación de las manufacturas en el ingreso nacional.

En ese análisis, tienden a excluirse las condiciones intrínsecas del desarrollo capitalista, que, por la naturaleza de sus relaciones constitutivas, es concentrador, extractivista, patriarcal, violento y excluyente.

De esta manera, al mismo tiempo que la intervención del capital es permanente, incorporando nuevos sectores y esferas de la vida, éste, en su incesante acumulación, concentra y centraliza los medios de producción y de control de la vida social (Vainer C., De Araujo F., 1992). A su vez, ejerce relaciones de dominación, subalternización y discriminación, articulando y profundizando la relación sexismo-racismo-explotación, expresada no sólo en el ejercicio de las empresas vinculadas al sector extractivo y el Estado sino también al interior de la familia, las comunidades y las organizaciones y movimientos sociales.

Políticas públicas, energía y mujeres

Entonces, ¿cuál es la naturaleza y el impacto de las políticas en la superación de estas desigualdades?

Hasta ahora, la respuesta generalizada fue y es una política rentista: utilizar los ingresos generados

por la mercantilización de recursos naturales para “mitigar” los efectos de estas políticas mediante compensaciones e inversiones locales en sectores sociales y económicos específicos.

Por otra parte, la acción de los Estados y de la cooperación internacional se concentran en generar acciones que tiendan a alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), buscando “erradicar la pobreza extrema, combatir la desigualdad y la injusticia y solucionar el cambio climático”, con algunos resultados y, en particular, incertidumbre.

El Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019⁸, de Naciones Unidas señala que, si bien se está avanzando en algunas áreas críticas y se observan algunas tendencias favorables como la reducción de la extrema pobreza y la tasa de mortalidad infantil o el compromiso de estados, organizaciones internacionales y otros actores con los ODS, entre otras; identifica muchas áreas que necesitan una atención colectiva urgente.

Destaca que peligra el objetivo de poner fin a la pobreza extrema para el año 2030, que el hambre en el mundo aumenta, menos de la mitad de la población mundial carece de servicios de salud esenciales y, **que las mujeres continúan enfrentándose a desventajas estructurales y a la discriminación.**

En ese marco, políticas, acciones e intervenciones de los Estados y organismos internacionales con el objetivo de “empoderar” a las mujeres, que son, en algunos casos, definidas como exitosas para la superación de roles de género y generación de condiciones de igualdad, en los hechos tienden a responder a una planificación que busca mejorar la educación y la salud, y generar el acceso a energía a los hogares o ingresos a las familias⁹,

7 Aguilar, Paula Lucía (2011): *La feminización de la pobreza: conceptualizaciones actuales y potencialidades analíticas.*

8 Naciones Unidas (2019): *Informe de los objetivos de Desarrollo Sostenible 2019.* <https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019_Spanish.pdf>

9 Ver Anexo, en el que se detallan líneas de financiamiento vinculadas al sector energía y actores de cooperación que responden a esas líneas.

El hambre en el mundo aumenta, menos de la mitad de la población mundial carece de servicios de salud esenciales y, que las mujeres continúan enfrentándose a desventajas estructurales y a la discriminación

predominando en estos espacios el concepto de “empoderamiento femenino” como de índole económica y separado de la política; por tanto, dejando de lado el dar respuesta a los problemas de equidad de género más profundos.

Como señala Rafia Zakara en “El mito del empoderamiento de las mujeres¹⁰” (New York Times, 2017):

...las feministas del Sur Global comenzaron a incluir el término en el repertorio léxico del desarrollo a mediados de la década de los ochenta. Aquellas mujeres comprendían el “empoderamiento” como la tarea de “transformar la subordinación de género” y eliminar “otras estructuras opresoras”, así como la “movilización política” colectiva. Lograron parte de sus objetivos cuando la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en 1995, adoptó “una agenda para el empoderamiento de la mujer”. “No obstante, a veintidós años de esa conferencia [2017], el “empoderamiento” se ha convertido en una palabra de moda entre los profesionales del desarrollo en Occidente, pero se eliminó su aspecto más relevante: el de la “movilización política”.

En el mismo sentido, es evidente que muchos de los proyectos de generación de energía y acceso a este servicio, bajo el rótulo de ser “destinados a mujeres”, son en general de eficiencia energética, energía renovable o uso de tecnología acorde a las condiciones locales y destinada a los hogares.

Éstos tienen incidencia local y resultan importantes en términos de mejorar ciertas condiciones de salud, reducir los tiempos empleados en la búsqueda de leña y biomasa para los hogares y permitir el desarrollo de otras actividades en el hogar. En algunos casos, la liberación de tiempo y tareas

también permite generar diálogo entre mujeres, espacios de información y hasta posibilidades de organización y de formación. Sin embargo, no existen indicadores que proporcionen información precisa sobre efectos en el empoderamiento real de las mujeres y en la eliminación de estructuras de discriminación en las que hayan tenido resultado.

Cuando se trata de proyectos comunitarios de acceso a energía, que involucran organización de la comunidad y participación de mujeres y hombres, las posibilidades de intervención activa de las mujeres son mayores. En estos casos es posible identificar reportes que señalan efectos en empoderamiento económico, capacidad organizativa y posibilidades de fortalecimiento colectivo para la participación política de hombres y mujeres de la comunidad.

EXPERIENCIAS, AVANCES Y LOGROS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

En el escenario actual, después del súper-ciclo de las materias primas, es evidente que no hay cambios reales en la orientación exportadora de las políticas públicas (apertura de la economía, impulso a las ramas productivas ligadas a los mercados externos, y promoción de la presencia de capitales transnacionales en los sectores vinculados a los recursos naturales).

En consecuencia, persisten los impactos sociales resultado de estas políticas y la desigualdad social tiende a crecer, como demuestran los niveles de desempleo, pobreza y deterioro de la calidad de vida.

En la región, históricamente, se han destacado importantes experiencias de resistencia contra la precarización de la vida en contextos extractivistas; entre estas, movimientos de rechazo a la implantación de grandes centrales hidroeléctricas promotoras de un modelo energético que niega las necesidades de las comunidades y prioriza los negocios empresariales, y en el que las mujeres

¹⁰ <<https://www.nytimes.com/es/2017/10/10/espanol/opinion/el-mito-del-empoderamiento-de-la-mujer.html>>

han sido las principales actrices de la defensa en sus territorios.

La imposición de proyectos de energía hidroeléctrica y otros vinculados a la industria extractiva (hidrocarburos y minería, en particular) son generadores de vulneración de derechos humanos individuales y colectivos, restringen la participación política y conllevan formas de criminalización, acoso y exclusión. Estos proyectos, a su vez, no tienen como fin prioritario resolver problemas estructurales que generan pobreza y desigualdad.

El efecto diferenciado de la actividad extractiva en la vida de las mujeres, en particular con la implantación de centrales hidroeléctricas y de operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos, también involucra el efecto diferenciado sobre las mujeres del no acceso a energía, resultado de políticas en las que prevalece y se prioriza la ganancia mercantil a las necesidades locales.

Se destaca, en lo que sigue, experiencias de procesos de resistencia y/o respuestas locales a políticas públicas y proyectos construidas a partir de luchas históricas, conocimiento y reflexión colectiva; también se ha incluido un caso, que promueve mejora de la calidad de vida de familias a partir de intervenciones dirigidas a hogares.

Experiencias, organización y formas de lucha de comunidades afectadas por megaproyectos

Caso Bolivia y región ALC Derechos humanos y megaproyectos: “De la formación, a la organización y acciones de resistencia”¹¹.

A partir del enfoque de derechos humanos, que brinda un marco conceptual amplio e integrado para analizar las causas de la pobreza, la realización



Fuente: Informe Curso Latinoamericano de derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales DESCA 2018. Programa Urbano, UNITAS, CEDLA (2018).

de procesos de capacitación a través de Cursos DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales) fortalecieron y tonificaron los esfuerzos en la lucha, de articulación y conocimiento por el cambio social, ayudando, a quienes participaron, a tomar conciencia sobre las obligaciones y compromisos que sus gobiernos han asumido con el fin de garantizar una vida digna y segura para todos.

En estos procesos¹² participaron representantes de organizaciones y actores sociales de Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia y Perú, de alcance local y nacional, y se impulsó la participación de mujeres en los procesos de formación, destacando la importancia del seguimiento al rol que desempeñan en sus comunidades y organizaciones después de esta etapa.

Como parte de estos procesos se generó una estrecha relación entre los participantes que provenían de pueblos indígenas, comunidades campesinas y urbanas, afro-descendientes y otros colectivos afectados por megaproyectos de desarrollo, industrias extractivas y agroindustria. Los participantes analizaron sus problemáticas territoriales, socio-culturales, laborales y ambientales, y los conflictos presentes o potenciales.

Desde 2014 se inició una etapa en cuyo enfoque se concentra la problemática creciente de la región amazónica como eje de disputas por el territorio y de afectación a derechos humanos.

¹¹ Elaborado con base en información proporcionada por las instituciones que llevaron adelante estos procesos, información de páginas de las instituciones u organizaciones socias y entrevistas a personal de Christian Aid en los diferentes países de ALC.

¹² Estos procesos fueron liderados por la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, UNITAS (Bolivia) y el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA (Bolivia).

La Amazonia sudamericana, una de las regiones donde se expande velozmente la frontera extractiva, es también un territorio en el que se articulan los planes de integración regional de infraestructura y energía, procesos que configuran a la Amazonia en un espacio en el que el principal objetivo es aprovechar potencialidades económicas a partir de la explotación intensiva de recursos naturales.

Los resultados de los cursos de formación DESCA se dan a diferentes niveles: en el espacio local, los participantes generaron un nivel de conocimiento, que, en varios casos, fortaleció el liderazgo y la comprensión de la necesidad de articulación; en el espacio regional, las estrategias de trabajo a corto, mediano y largo plazo definidas por los participantes, enfrentaron dificultades en términos de otros espacios de encuentro, articulación y recursos económicos. Sin embargo, la continuidad de este proceso, desarrollado a lo largo de varios años, marca una dirección construida colectivamente, que ha permitido a las comunidades afectadas por megaproyectos contar con objetivos comunes y estrategias de trabajo que fortalecen e impulsan sus alianzas a escala nacional e internacional, las acciones de denuncia y la resistencia por la defensa del territorio.

A partir de 2018, la dirección adoptada en el marco de la formación y articulación se concentró en generar respuestas y acciones que enfrenten la lógica de promover grandes proyectos de cen-



Fuente: Informe Curso Latinoamericano de derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales DESCA 2018. Programa Urbano, UNITAS, CEDLA (2018).

trales hidroeléctricas en bosques tropicales y la realización de acciones de articulación regional, vinculadas al trabajo conjunto con el Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB por sus siglas en portugués) y con el fortalecimiento del Movimiento de Afectados por Represas (MAR-América Latina).

Una de las estrategias de impulso a las alianzas regionales e incidencia en espacios de decisión, fue la solicitud de audiencia temática “Responsabilidades de los Bancos Multilaterales de Desarrollo como Organizaciones Internacionales en el contexto de las violaciones de Derechos Humanos asociados a la Construcción de Megaproyectos Hidroeléctricos”, presentada en septiembre de 2018 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)¹³.

Otra de las cosas que me tocó fue ver, en nuestros propios territorios, la vulnerabilidad, la fragilidad de las mujeres, que sólo hablan su idioma y eso las hace muy inocentes, el hecho de saber que se están tomando decisiones sobre sus vidas sin su participación, sin que ellas entiendan y más todavía que son sus parejas los hombres, quiénes están trabajando como peones, como obreros en los proyectos complementarios de Vhepete y Bala y ver a las mujeres con sus hijos sin tener acceso a la información y que son finalmente los hombres quiénes van a tomar decisiones, es muy triste. El hecho de no poder decirles, explicarles y advertirles que eso que hacen, eso que están construyendo es un atentado a su forma de vida. (Ruth Alipaz Cuqui. Activista indígena y defensora-)

13 Las organizaciones solicitantes son: Movimiento Ríos Vivos, COLOMBIA, Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB, Rondonia, BRASIL); Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI, PERÚ, Coordinadora de la mujer, generación y familia-Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP, PERÚ), Organización de la Mujer Campesina e Indígena (OMUCAI PACHAMAMA, PERÚ), Comité Defensores de la Vida Amazónica en la Cuenca del Madera, BOLIVIA; Comité de Defensa Tierra y Territorio ante Hidroeléctrica Rositas, BOLIVIA; Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, BOLIVIA; Consejo Indígena del Pueblo Tacana.

ra del medioambiente, es Coordinadora General de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas, CONTIOCAP. Illanes C. (2019). Mujeres y Extractivismo, La difícil tarea de defender la vida).

El 2019 se fortalecieron las acciones y en junio de ese año, organizaciones sociales afectadas por los proyectos hidroeléctricos en Brasil, Colombia y Bolivia lanzaron la campaña *No a las hidroeléctricas en la Amazonia, sí a la vida*, que busca generar conciencia y emprender acciones, en espacios nacionales e internacionales, para evitar la destrucción del territorio amazónico y la desaparición de pueblos y comunidades.

Las luchas de estas organizaciones reviven y profundizan las luchas mundiales contra las grandes centrales hidroeléctricas iniciadas en los años noventa, que llevaron a la creación de la Comisión Mundial de Represas¹⁴. Confrontan la intervención del poder del capital empresarial y financiero en los territorios, que pretenden imponerse con el apoyo de gobiernos y sus autoridades para ejecutar proyectos de generación de hidroelectricidad a gran escala. Interpelan, asimismo, el modelo de desarrollo y el modelo energético que los estados van imponiendo en la Amazonia y otras regiones.

Estas organizaciones sociales y otras que, desde los territorios, cuestionan la lógica de avance de

la frontera extractiva, se enfrentan a una red de agentes: empresas estatales y privadas nacionales e internacionales, actores de gobierno e instituciones financieras que operan a diferentes escalas (nacional, internacional y supranacional).

Estos actores se relacionan con muchos proyectos que configuran uno mayor, en algunos casos de alcance continental, parte de otro —todavía más amplio, insertado en la lógica del capital global— que encuentra su expresión en planes regionales de alcance continental como son la Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana, IIRSA (que hasta 2019 funcionaba como el Consejo de Infraestructura y Planeamiento, COSIPLAN, de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR) y el Plan Puebla-Panamá (hoy Plan Mesoamérica).

En este sentido, la articulación de organizaciones sociales que resisten a la construcción de grandes represas y se enfrentan a alianzas de poderes estatales, empresariales y del sistema financiero, hace visible la existencia y confrontación de dos lógicas distintas de apropiación y reconfiguración geográfica y social expresadas en la construcción de una central hidroeléctrica a gran escala:

Una es la de los afectados que, como comunidades indígenas, campesinas y pueblos, viven bajo un “modelo tecnológico sumamente simple, aunque a la vez complejo, ya que no solamente no está sometido a la búsqueda de transformaciones permanentes, sino que se constituye a través de una lenta evolución y, sobre todo, transforma la adaptación del modelo tecnológico a las condiciones del espacio”.

La otra está en armonía con la “visión desarrollista”, sobre la cual “se realiza un trabajo tecnológico no destinado a mejorar la permanencia de las formas espacio-temporales, sino orientado a acelerar el cambio e intensificar temporalmente la apropiación del espacio¹⁵.”

(CIPTA, BOLIVIA); Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), BOLIVIA; Programa NINA, BOLIVIA, Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), Programa Urbano, BOLIVIA.

14 La Comisión Mundial de Represas (CMR), formada a principios de 1998 por el Banco Mundial y la IUCN a pedido de comunidades afectadas por estas mega obras, fue una comisión independiente creada con el objetivo de revisar la eficacia de las represas grandes para impulsar el desarrollo y evaluar las alternativas para desarrollar recursos hídricos y energéticos; y desarrollar criterios, lineamientos y normas internacionalmente aceptables en la toma de decisiones en planeación, diseño, construcción, monitoreo, operación y desmantelamiento de represas. Concluyó su trabajo en 2000, con su Informe final.

15 Silva L., Vinolhi A. (2016)

La articulación de organizaciones sociales que resisten a la construcción de grandes represas y se enfrentan a alianzas de poderes estatales, empresariales y del sistema financiero, hace visible la existencia y confrontación de dos lógicas distintas de apropiación y reconfiguración geográfica y social

Caso Brasil: Mujeres conscientes de su rol político frente a los impactos del modelo energético sobre las comunidades y su vida: “Arpilleras bordando la resistencia”

Un componente esencial en el Movimiento de Afectados por Represas, es la formación, articulación y fortalecimiento de la participación de las mujeres de este movimiento, para comprender los efectos de la violencia (a todo nivel) que sufren como consecuencia del modelo de desarrollo y energético vigente.

El MAB afirma que, debido a su posición en la división internacional del trabajo y la existencia de una base natural ventajosa, Brasil ha centrado su modelo energético en el suministro de energía barata a grandes empresas transnacionales y de gran demanda de energía, que es explotada y exportada en productos de bajo valor agregado y de baja generación de empleos.

De esta manera, esas empresas, denominadas electro-intensivas, contribuyen muy poco al dinamismo de la industria de Brasil, a la vez que son las principales responsables de la degradación ambiental (*Mujeres Afectadas*. MAB, 2013).

La implantación de presas destinadas a la provisión de electricidad, en ese modelo energético, ha causado repetidamente graves violaciones de derechos humanos, y sus consecuencias terminan acentuando las profundas desigualdades sociales que se traducen en situaciones de miseria y desorganización individual, familiar y social.

En su búsqueda por comprender y enfrentar la realidad del impacto de las represas en Brasil, el

MAB concluyó que estos proyectos afectan de manera particular a las mujeres, ya que, cuando se produce el colapso de su comunidad, ellas encuentran mayores obstáculos para recomponer sus medios y formas de vida; además que las acciones de violación de derechos humanos sobre las mujeres se producen con mayor frecuencia y brutalidad.

De más de un millón de afectados en el país [Brasil], el 70% no recibió ningún tipo de compensación. Y el panorama de las violaciones de derechos solo empeoró con la privatización del sector eléctrico en la década de 1990.

En la situación actual, la crisis del capital intensifica la carrera hacia la explotación de bases naturales ventajosas y aumenta el grado de explotación de trabajadores y trabajadoras. En una crisis como esta, las mujeres son las que más sufren de hambre y violencia. Movimiento dos Atingidos por Barragens. MAB, 2015.

El análisis desde el Movimiento de Afectados por Represas de Brasil no difiere de la realidad presente en ALC. El MAB resalta que “a pesar de todos los avances históricos realizados por la lucha feminista, las mujeres todavía se encuentran en una posición de subordinación a los hombres”.

Destaca también que entre los factores que violan los derechos de las mujeres afectadas, están directamente los relacionados con el no reconocimiento del trabajo. Cuando se impone la presa, las mujeres sufren de forma directa por la pérdida de sus fuentes de ingresos, generalmente trabajos autónomos e informales que dependen de los lazos comunitarios que se disuelven; al mismo tiempo, pierden la red de apoyo de vecinos y familias en el cuidado del hogar, hijos y ancianos, que mantenían dentro de la comunidad.

Por otra parte, cuando logran asumir nuevos empleos, el mercado laboral es restringido

para las mujeres y su trabajo es valorado por debajo del de los hombres, resultando en salarios injustos y precarios.

Además de las violaciones resultantes de la construcción de las obras, las mujeres también son víctimas de las contradicciones del modelo energético. La falta de energía y agua, una situación precaria a la que están sometidas muchas familias afectadas, hace que el trabajo de las mujeres sea mucho más difícil, ya que terminan gastando más energía humana para compensar la falta de electricidad en el hogar, así como tener que viajar largas distancias para obtener agua para la familia¹⁶.

En los últimos años, el MAB ha impulsado acciones que promueven la participación permanente de las mujeres, como sujeto político activo y fortalecido en las luchas sociales en los estados brasileños y en la lucha por un nuevo modelo energético y de resistencia a centrales hidroeléctricas. Genera espacios de diálogo y de formación sobre la opresión en la que viven las mujeres frente a las acciones desde el Estado y las empresas, promueve la articulación y discusión sobre las formas en las que se da la vulneración de derechos y la afectación a las mujeres.

A partir del Colectivo de Mujeres, el MAB ha desarrollado desde 2013 un trabajo de documentación de las violaciones de derechos humanos que sufren las mujeres afectadas por represas. Las señoras y jóvenes del movimiento usan la metodología de las arpilleras, una técnica de bordado que recoge el testimonio textil de cerca de 900 mujeres afectadas, bajo el lema: *“Arpilleras, bordando la resistencia”*¹⁷.

16 Movimento dos Antígidos por Barragens. (2013): Mujeres afectadas. El modelo energético brasileño y la violación de los derechos de las mujeres.

17 “La técnica de bordado conocida como “arpillera” tiene sus orígenes en la resistencia contra la dictadura militar chilena. En Chile, con las ropas de sus parientes desaparecidos, mujeres de los suburbios de Santiago denunciaron las diversas violaciones de derechos cometidas contra aquellos que se posicionaron en contra del régimen comandado por Augusto Pinochet.



Fuente: En Brasil Las agujas dan poder. Inspiration (2015)

Si bien, el alcance es el movimiento en su conjunto, el énfasis es el fortalecimiento del Colectivo de Mujeres y del Colectivo de Jóvenes, en el que también participan mujeres.

El MAB tiene una historia de décadas de lucha contra centrales hidroeléctricas y despojo territorial, bajo la consigna *“Agua y energía no son mercancía”*.

Se describe como un movimiento popular, autónomo, de lucha, de masas, de base, que pretende organizar a toda la población amenazada o afectada por represas hidroeléctricas.

Es un movimiento que lucha para garantizar los derechos de estas poblaciones, principalmente a la tierra, forzando y contribuyendo en la construcción de un nuevo modelo energético, alternativo y popular para Brasil. Tiene presencia en todas las regiones brasileñas afectadas por hidroeléctricas.

El Colectivo de Mujeres nace de la comprensión de la organización de las dificultades particulares que enfrentan las mujeres de manera individual, como parte del grupo familiar o como colectividad, y de la violencia que el poder político, patriarcal, empresa-

Con las labores de arpillera las mujeres chilenas se transformaron en protagonistas de la resistencia contra la dictadura y eso es lo que se quiere conseguir con este proyecto en Brasil donde mujeres de diferentes regiones llevan desde 2013 utilizando esta técnica de bordado para contar las violaciones cometidas en la construcción de represas.” <https://www.inspiration.org/cooperacion/en-brasil-las-agujas-dan-poder/>.

rial y financiero ejerce sobre ellas —en el avance de su política energética que genera despojo y vulneración de derechos— incluyendo el hecho de ser las principales afectadas por las limitaciones de acceso a energía.

En ese sentido, el MAB ha concluido en la necesidad de participación y presencia activa de las mujeres en todos los procesos, pretendiendo que sean también parte en los niveles de dirección. El MAB reconoce su estructura histórica dominada por hombres, pero busca avanzar en la presencia y participación permanente de las mujeres en todas sus instancias.

A partir de 2016, el MAB lidera la constitución del MAR (Movimiento de Afectados por Represas Regional), articulación de organizaciones de Centro y Sudamérica cuyo objetivo “es actuar como una herramienta política de lucha para la construcción de un modelo energético popular, teniendo como perspectiva la construcción de un nuevo modelo de sociedad”.

Si bien, desde el 2010, el desempeño del MAR se expresa en procesos de formación y debate, esta organización regional se encuentra aún en una etapa inicial de constitución, definición de estrategias, formas de articulación y acción colectiva. Limitantes con las que se encuentra parten del hecho de que en países sudamericanos más allá de Brasil, el impulso a la construcción de grandes centrales hidroeléctricas es relativamente reciente o es parte de un nuevo impulso, en el marco de las políticas públicas de los últimos 15 años.

De esta manera, las acciones de formación y resistencia del movimiento regional se desenvuelven en función a proyectos específicos, siendo que muchos actores locales fuera de Brasil aún se encuentran en etapa inicial de debate amplio y conocimiento de los efectos y la lógica a la que responden estas cuantiosas inversiones. Destaca, en ese contexto, la ausencia en la mayoría de los países, de un debate público sobre la dirección de las políticas energéticas en relación a la hidroelectricidad y exportación de energía. A pesar del esfuerzo permanente que realizan algunas organizaciones y afectados por la

construcción de centrales hidroeléctricas como el MAB y el MAR, el modelo energético y los efectos de estas obras aún no llegan a estar plenamente agendados en la esfera pública.

Los procesos que configuran un fin de ciclo político y económico —ligado a gobiernos progresistas y la relación que con éstos han tenido organizaciones sociales de la región— configuran, en algunos casos, un escenario de debilitamiento de organizaciones sociales y de conformación de una agenda social y política muy amplia, que en general concentra tiempo y atención de las organizaciones sociales.

En ese escenario, el MAR se encuentra en plena actividad, vigorizado con la construcción de una agenda común de acciones, y cuyo resultado es parte de los procesos de muchos años de formación y articulación con afectados y organizaciones sociales, y que a su vez fue fortalecido con el proceso de formación en derechos humanos que se realizaron en Bolivia.

Caso Guatemala: Hacer frente a las grandes centrales hidroeléctricas, reflejo de la militarización de territorios, con alternativas locales como micro centrales comunitarias

El Colectivo Madre Selva apoya e impulsa las hidroeléctricas comunitarias, pequeñas y que generan electricidad a bajo costo, con el manejo de las propias comunidades, dando servicio a aldeas rurales sin afectar la biodiversidad.

El objetivo es responder a las necesidades locales proyectando mejoras evidentes en la calidad de vida, al mismo tiempo que promover organización local y estrategias productivas a partir de este servicio. En ese sentido expresan:

Las pequeñas hidroeléctricas comunitarias son una alternativa viable para el manejo autónomo de la energía frente al modelo de comercialización de la electricidad en Guatemala, ya que las comunidades utilizan el potencial hídrico local sin afectar el caudal ecológico de las

fuentes de agua como lo hacen las grandes hidroeléctricas, proveen electricidad a un costo justo versus las altas tarifas que tienen que pagar por el lucro excesivo de las empresas distribuidoras, obtienen beneficios económicos de su administración, así como desarrollo de capacidades locales en su gestión, conocimientos y mantenimiento técnico. El desarrollo energético siempre ha estado negado para las comunidades, ha sido diseñado desde fuera, las pequeñas hidroeléctricas comunitarias significan una gestión autónoma de los bienes naturales con plena participación de la población local, dignificando su desarrollo, condiciones de vida y empoderamiento¹⁸.

A la vez que promueven una alternativa concreta de respuesta a las necesidades locales de baja inversión, potenciando las formas de organización propias de las comunidades, esta visión de trabajo plantea cuestionamientos, oposición sustentada y lecturas sobre las estrategias de resistencia frente a las acciones de empresas y gobiernos que están vinculados a la implantación de grandes hidroeléctricas y que tienen una historia de vulneración de derechos.

Estas experiencias interpelan la política energética dirigida a grandes proyectos, demostrando que las “hidroeléctricas pequeñas que no afectan la biodiversidad y que son manejadas por las comunidades corresponden a una política energética nacional a favor de los intereses del pueblo guatemalteco”.

Una experiencia positiva se encuentra en el municipio de Uspantán, en la Zona Reina de El Quiché, con la hidroeléctrica comunitaria 31 de Mayo. La hidroeléctrica toma una parte del caudal del río mediante una captación lateral. No interrumpe el caudal ecológico y produce electricidad para la comunidad. Se construyó con el trabajo voluntario de los comunitarios y fue financiada con el apoyo de la organización Siembra de las Islas Canarias.

Colectivo Madre Selva, 2015.

No obstante que las micro centrales comunitarias llegan a ser una solución a una necesidad demandada desde las regiones más excluidas, la política pública tiene una dirección que dificulta su desarrollo: no pueden vender energía al sistema eléctrico nacional ni reciben el subsidio de la tarifa social.

En ese contexto, un ejemplo inicialmente exitoso de generación eléctrica, que se desarrolló en la aldea Chel de San Gaspar Chajul, departamento del Quiché, fue reportado con grandes dificultades en 2019. Inaugurada en 2007, es una de las primeras hidroeléctricas comunitarias de Guatemala y sirvió de ejemplo a otros proyectos de características similares en otras regiones de ese país. Genera electricidad a bajo costo por medio de una mini hidroeléctrica que daba servicio inicialmente a tres aldeas con 440 familias. La administración está a cargo de la Asociación Chelence (Asochel) y es un ejemplo vivo de un proyecto comunitario de bajo impacto ambiental con beneficios claros para la población local. Posteriormente, Asochel estaba integrada por once comunidades que correspondían a 1,600 familias usuarias del servicio.

Un reporte del año 2019¹⁹, estableció que la demanda eléctrica en Chel creció demasiado sin que se lograra aumentar la capacidad de su pequeña central debido a la imposibilidad de adquirir una nueva turbina, por el elevado costo de ésta en comparación con los ingresos de Asochel. Uno de los principales problemas identificados es el costo del servicio, que, si bien es bajo, las condiciones de pobreza de la región impiden que un importante porcentaje de asociados puedan pagar su factura eléctrica.

Es así como estos proyectos se enfrentan a grandes dificultades organizativas, financieras, de sostenibilidad y de no contar con apoyo estatal; pero, al tratarse de proyectos a escala local, que surgen del impulso comu-

18 Colectivo Madre Selva. (2015): ¿Grandes hidroeléctricas ¿beneficio para quién? <https://madreselva.org.gt/?p=965>

19 Cabria Elsa, Villagrán Ximena. (2019): Una aldea ve morir su hidroeléctrica. <<https://www.plazapublica.com.gt/content/una-aldea-ve-morir-su-hidroelectrica>>

Al tratarse de proyectos a escala local, que surgen del impulso comunitario, fortalecen la participación de las mujeres en las decisiones comunitarias, impulsando su liderazgo y consolidando su participación efectiva en los espacios de toma de decisión

nitario, fortalecen la participación de las mujeres en las decisiones comunitarias, impulsando su liderazgo y consolidando su participación efectiva en los espacios de toma de decisión.

La construcción de grandes centrales hidroeléctricas en Guatemala es parte de la memoria colectiva vinculada a la dictadura y la vulneración sistemática de derechos de las comunidades indígenas.

Como parte de acciones de resistencia, se mantiene la memoria histórica de lucha, y en el debate público, la militarización, masacre, acciones para el control territorial y el resarcimiento de daños que nunca llegó, como es el caso del proyecto Chixoy²⁰. Este componente particular, fortalece la resistencia y defensa del agua, la tierra y sitios sagrados de las comunidades locales, frente a proyectos hidroeléctricos como Río Hondo, Oxec I y Oxec II, en el río Cahabón y su afluente Oxec.

La situación en Guatemala mantiene rasgos marcados de violencia: se han registrado asesinatos y desalojos de miembros de comunidades, encarcelamiento de líderes, además de campañas de

difamación, que en algún momento llega hasta criminalización de la resistencia. En ese escenario, se desarrollan las acciones sociales de los movimientos, que, en muchos casos, se enfrentan al sector empresarial privado, transnacional y autoridades locales, quienes, con la complicidad de los poderes ejecutivo y judicial son encargados de “negociar” derechos humanos mediante “compensaciones o mitigaciones ambientales”, tal como lo informa el Colectivo Madre Selva.

Caso Colombia: Hidroituango-Inundar la historia para exportar electricidad: militarización, sueños de desarrollo y catástrofe

El proyecto hidroeléctrico más grande que se construye en Colombia es la represa de Hidroituango, con un embalse de 79 kilómetros de largo y una presa de 220 m. de altura con capacidad de hasta 2.720 millones de metros cúbicos de agua para la generación de 2.400 MW. Afecta a doce municipios sobre la cuenca del río Cauca en el departamento de Antioquia. Lo lleva adelante la multinacional Empresas Públicas de Medellín (EPM) y su construcción se inició en 2010, aunque la planificación data de 1970, y se desconoce la fecha de inicio de entrada en operación, debido a graves problemas técnicos, ambientales y políticos.

Desde que la idea del proyecto fue plasmada, surgieron voces locales en desacuerdo en diferentes espacios, pero sin tener gran eco en las principales ciudades y centros de poder político, menos aún en Medellín, ya que el municipio es parte de EPM. Las preocupaciones por las consecuencias ecológicas del proyecto, los efectos sociales y la forma de llevarlo adelante con presencia policial en la zona (sin considerar las preocupaciones por las personas desaparecidas y muertas en el conflicto armado que quedarían sumergidas bajo decenas de metros de agua y la violencia que persiste en la zona), se enfrentaron con la amplia propaganda de desarrollo nacional y de los cuantiosos recursos de exportación que llegarían a la región junto a proyectos productivos y de desarrollo local a lo

²⁰ El aprovechamiento hidroeléctrico Chixoy–Pueblo Viejo, financiado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, se construyó sobre el Río Chixoy a principios de los años ochenta y fueron desplazados forzosamente más de 3.500 miembros de comunidades mayas. Más de 6000 familias que vivían en la zona también sufrieron la pérdida de sus tierras y modos de sustento. Cuando los miembros de las comunidades se opusieron a la reubicación y exigieron mejor compensación, fueron masacrados, torturados y secuestrados. Durante más de 20 años, las comunidades afectadas por la Represa Chixoy han exigido las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por el proyecto, construido durante la dictadura militar más represiva de Guatemala. <https://www.internationalrivers.org/es/campaigns/represa-chixoy-guatemala>.

largo de los municipios y comunidades que se propagandizaron para convencer a la población.

“...primero anularon la existencia de la comunidad indígena y cuando uno no existe lo desaparecen. Ese es el primer reto que teníamos, “que existimos”. Su discurso (del Estado) era, allá no queda nadie, allá no hay gente. Fuimos desplazados por el desarrollo, que es más cruel. Todo lo que quisieron borrar con el militarismo, hoy también, ocurre con esta tragedia.

El 2012, dijimos va a haber avalancha, la montaña se va a venir. Nos dijeron que no queríamos desarrollo, que no sabíamos nada.”

Isabel Zuleta*: En medio de la tragedia de Hidroituango hay un grito de esperanza del río Cauca. (2018).

*Socióloga y líder de la resistencia y denuncia del proyecto Hidroituango, en la actualidad preside Ríos Vivos Antioquia).

La ejecución del proyecto trajo consigo percances e incidentes que han provocado un problema social y económico de magnitud tras la emergencia abierta desde mayo del 2018, tiempo en el que, de manera preventiva, se obligó la evacuación temporal de las poblaciones adyacentes al río como forma de prevenir un eventual riesgo de elevación de caudal y desborde del nivel del agua sobre la presa aún en construcción²¹.

“Necesitamos sobrevivir. Reconstruir nuestra vida. Esperamos que sea respetando nuestra forma de vida y esperamos que vengan, nos visiten y nos ayuden a descubrir todas las mentiras de lo que ha sido Hidroituango, que han pasado por encima de la gente, que los valores por la vida y el respeto por la muerte se resalten, eso no tiene fronteras, así, como el agua no tiene fronteras, las montañas no tienen fronteras. Es muy importante que resurja una conciencia ética planetaria, necesaria para que se respete lo sagrado”.

Isabel Zuleta: En medio de la tragedia de Hidroituango hay un grito de esperanza del río Cauca. (2018) <https://iglesiasymineria.org/>.

Este incidente, catalogado como catástrofe por su magnitud, impactó en varias poblaciones, presentando dificultades y necesidad de mayores recursos para su superación. Los efectos de este proyecto, que aún persisten, concentran y son un ejemplo actual de las consecuencias sociales, ambientales, ecológicas y económicas de este tipo de intervención. Actualmente mantienen en alerta y condiciones de riesgo a alrededor de 100.000 personas.

La situación no es novedosa en grandes centrales hidroeléctricas, pues ya fue alertada en el Informe del año 2000 de la Comisión Mundial de Represas, advirtiendo los efectos de estas mega obras en diferentes regiones del mundo. Actualmente los sucesos de Hidroituango han motivado a que estén en marcha acciones frente a instituciones financieras internacionales y procesos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros.

Este caso, resulta un ejemplo de las dificultades que implican trasladar, a esferas públicas nacionales e internacionales, demandas de movimientos locales de resistencia frente a intervenciones que (a la vez que son resistidas) también se enfrentan a la propaganda y acciones de persecución y descrédito.

La catástrofe ha sido el hecho que ha puesto la mirada en el proyecto, pero aún es escaso el debate sobre las políticas, procesos, intereses y actores que impulsan estas inversiones.

***Caso Haití y República Dominicana:
Promoviendo políticas y prácticas
ambientales sostenibles y acciones para
la adaptación al cambio climático en
regiones de la frontera Haití/República
Dominicana***

La frontera dominico-haitiana es un espacio constituido por recursos mineros. Las iniciativas de

21 <https://tierracolombiana.org/hidroituango-proyecto-hidroelectrico-mas-grande-la-historia-colombia/>

inversión para el desarrollo de la industria minera que encaminan República Dominicana y Haití comprometen el ambiente natural e introducen presión de competencia sobre el recurso agua.

La zona de frontera presenta un fuerte deterioro medioambiental con una considerable merma de los bosques, alto nivel de pobreza y una débil gobernabilidad para la protección de los recursos naturales, además de los efectos del cambio climático.

El uso irracional de los suelos en la agricultura de subsistencia y del carbón o leña como fuente de energía ha aumentado progresivamente la deforestación, impactando la erosión de los suelos y la capacidad de retención de agua de las cuencas fluviales en los suelos y subsuelos, en un agotamiento de los ríos, que desaparecen en períodos de sequía.

Es también una zona que vive el conflicto de la migración, resultado de los desastres generados en los últimos años, al tratarse de una de las regiones que sufre de manera más violenta los efectos del cambio climático.

En la línea limítrofe binacional, el Centro Montalvo (Solidaridad Fronteriza) y el Servicio Jesuita para Migrantes trabajan en la construcción de “buenas relaciones de frontera” con diferentes actores: autoridades municipales, poblaciones, grupos de jóvenes, asociaciones ciudadanas, etc., que, luego de afrontar los efectos del cambio climático, la migración y el trabajo humanitario, buscan sensibilizar y encontrar formas de enfrentar la situación de desprotección y extrema pobreza de la región. Allí se forman líderes promotores de educación, monitores de migración e indocumentación, situación que afecta en primer lugar a las mujeres.

Es el resultado de la necesidad de empoderar y organizar a las comunidades locales y la sociedad civil con el objetivo de trabajar con autoridades locales de municipios y de provincias concentrados en la frontera norte y la provincia Dajabón (RD), para implementar políticas ambientales y aumen-

tar la concienciación sobre la importancia de las prácticas ambientales sostenibles.

Como resultado de estas acciones, han logrado un importante incremento en la cantidad de actores comprometidos e integrados en la lucha medioambiental, con capacidad de replicar las informaciones y conocimientos en las comunidades. También se va logrando mayor nivel de exigencia de justicia socioambiental por parte de los actores ambientales de la zona, lo que significa mayor preocupación por la explotación minera.

Entre los resultados evaluados, las organizaciones involucradas identificaron la necesidad de fortalecer la integración de las mujeres en los procesos de toma de decisión y espacios de poder para garantizar una participación más equitativa. Constataron, asimismo, una mayor participación de mujeres en procesos formativos que en los espacios de direcciones y coordinaciones de las organizaciones ambientales.

Por otra parte, el Centro Montalvo ha ejecutado un proyecto de Acciones para la adaptación al cambio climático en la frontera Haití/República Dominicana, para la promoción de prácticas y políticas ambientales sostenibles en toda la región. El proyecto ha sido implementado por Solidaridad Fronteriza (Centro de Reflexión y Acción Social Padre Juan Montalvo-Centro Montalvo) y articulado con organizaciones y asociaciones medioambientales y sociales de las comunidades, grupos de mujeres rurales, escuelas y autoridades locales y nacionales.

El objetivo del proyecto es ayudar a organizar y aumentar la capacidad de la sociedad civil y de las organizaciones comunitarias locales, de tal manera que se puedan desarrollar conocimientos y habilidades para abogar por temas relacionados con el cambio climático, así como “aprender a utilizar las herramientas y estrategias de incidencia pertinentes a diferentes niveles: desde la defensa local hasta la defensa nacional, así como hacer el enlace a nivel internacional”.

Iniciativas particulares de esta intervención son las lámparas solares y cocinas a leña eficientes. Una

cocina tradicional en áreas rurales de Haití, República Dominicana y otros países, es básicamente un fuego de leña con dos o tres grandes piedras alrededor que sirven para soportar un recipiente encima del fuego, donde se cocinan los alimentos, todo en un espacio cerrado dentro del hogar. Esta manera de cocinar tan simple y poco eficiente conlleva una serie de problemas tanto para quien cocina, mayoritariamente mujeres que se ven obligadas a respirar los humos formados durante la combustión, como para el medio ambiente debido al gran consumo de leña y la consecuente deforestación de los bosques.

Una cocina mejorada, en cambio, tiene como principal función evacuar los humos generados durante la combustión, además de otorgar comodidad y ahorrar leña a las usuarias, debido a una combustión más eficiente.

Se puede afirmar que las experiencias en diversos lugares muestran alta probabilidad de que las cocinas reduzcan el elevado consumo de leña, como también el tiempo promedio que las mujeres adultas utilizan para la recolección y traslado de leña, y en especial tiene efectos positivos en la salud de las mujeres, quienes generalmente se encargan de la alimentación del hogar.

Caso Bolivia

Cocinas solares, hornos secadores solares y otros proyectos de energía renovable para beneficio de comunidades y familias, y para promover la actividad económica local

El 80% de las familias de las zonas rurales de Bolivia (alrededor de 1.160.000 familias) utilizan biomasa para cocinar: leña, estiércol, carbón vegetal, residuos forestales, aserrín y pulpa de caña de azúcar.

Recolectar combustible consume muchas horas y es una actividad generalmente realizada por niños y mujeres.

Varias instituciones que trabajan en energías renovables en Bolivia buscan aumentar la productividad y el bienestar de las comunidades. Según sus infor-

mes, en los que refieren tecnologías empleadas con un fuerte enfoque de género, incluyen:

- Paneles solares para proporcionar energía a las bombillas y enchufes a hogares y proporcionar energía a los cargadores de teléfonos, radios, etc.

- Cocinas solares para familias en comunidades amazónicas, desafiando los roles nacionales de género, reduciendo el uso de combustibles fósiles y ahorrando dinero gastado en diésel.

- Bombas generadas por energía solar para extraer agua limpia para las comunidades amazónicas afectadas por megaproyectos y la contaminación de sus ríos.

- Baños ecológicos para que una escuela reduzca la contaminación y las enfermedades, y proporcione dignidad y seguridad, especialmente a las niñas de la escuela.

- Cosechadoras de agua para recolectar agua, irrigar plantas y uso doméstico.

- Hornos secadores solares de cacao para aumentar el volumen y obtener calidad.

Estas acciones, han logrado un importante incremento en la cantidad de actores comprometidos e integrados en la lucha medioambiental, con capacidad de replicar las informaciones y conocimientos en las comunidades.

Actualmente 60 familias en diferentes partes de la Amazonía boliviana se están beneficiando del sol para hornear sus alimentos. “En nuestra comunidad, las mujeres están ganando experiencia en el uso de los hornos solares. He visto su entusiasmo; sé que están aprovechando al máximo los hornos solares. Estos hornos son ecológicos; nos permiten evitar quemar mucha leña”. También nos ayuda a las mujeres a respirar menos humo. Esto es nuestro bienestar para que podamos vivir más tiempo. Sé que las mujeres continuarán mejorando el uso de los hornos “, dijo una mujer de la comunidad de Nueva Betania.

Córdova C., Solar ovens in the Amazon continue to surpass our expectations.

De estos proyectos, las cocinas solares han alcanzado prioridad llegando a alrededor de 250 familias ubicadas en la región amazónica boliviana. En esta región se va ampliando el uso de esta tecnología de manera creciente, partiendo de una etapa inicial con una frecuencia de uso de una vez a tres veces por semana, que es el resultado actual.

Según sus impulsores, las mujeres han aprendido a cocinar en ellas y han ampliado su uso para otras labores. La cocina solar funciona con una tecnología muy sencilla, es de fácil mantenimiento e instalación y es posible su fácil difusión en la comunidad. Tiene un dispositivo basado en un sistema de concentración solar que aprovecha la energía solar y la transforma en energía térmica.

El horno de secado de granos tiene el fin de promover actividades productivas en las que participen mujeres.

Ha reducido el tiempo de secado, que significa que no sólo aumentó el volumen de granos de alta calidad para vender con mayores ingresos, sino que



Fuente: Christian Aid

también ha liberado más tiempo para que las mujeres se reúnan y participen en otras actividades. Ha resultado también una fuente de ingresos adicionales al ser alquilada para otros fines.

CONCLUSIÓN

Este análisis y desarrollo de casos, evidencia que —con predominancia estatal o privada, bajo el actual modelo de desarrollo capitalista— la forma de reproducción material de la sociedad es un proceso continuo de explotación que impone relaciones de poder y de dominación, en una dinámica insostenible, sobre todo para las mujeres de los diferentes países de Latinoamérica y el Caribe.

En ese contexto, hay una tendencia desde los estados, instituciones financieras y otros actores, a evadir la realidad y por tanto tampoco enfrentar en gran parte de sus intervenciones, que es necesario un cambio estructural de la sociedad para eliminar las estructuras que discriminan a la mujer.

Prevalecen en la agenda del desarrollo programas que señalan como destinatario final a las mujeres. Sin embargo, los proyectos que surgen en ese marco que buscan mejorar condiciones de acceso a servicios, condiciones de salud y/o mejores ingresos para las familias, si bien pueden significar ciertas mejoras en las condiciones de vida de las mujeres y las familias, dan escasas respuestas a la necesidad de “empoderamiento real” de las mujeres, que les permita aumentar su potencial para la movilización, participación política y por tanto capacidad de adoptar papeles activos en la comunidad y superar roles de género preestablecidos.

Un retorno a un modelo original de “empoderamiento de las mujeres”, como expresa Rafia Zakara, requiere que se deje de reducir a la mujer a su condición de víctima: la sobreviviente de una violación, la viuda de guerra, la niña novia.

Urge que las intervenciones sean definidas a partir de las demandas y necesidades locales priorizando el acceso a recursos naturales para la vida

de las comunidades e impulsando la organización social y participación plena de las mujeres en las decisiones.

Eso implica no sólo transformar las formas de producción sino, más bien, la transformación de las relaciones sociales de dominación y explotación.

Nuevas formas de economía común, como el reconocimiento de valor a la autoproducción de energía, la autoproducción de alimentos, el uso no consuntivo de agua, los ahorros de energía y la reducción de consumos específicos, por ejemplo, son elementos que están en el debate —en los procesos de formación y acciones de resistencia de la sociedad civil— que buscan introducir cambios en la matriz de producción y de consumo.

ANEXO: LINEAS DE ACCIÓN PREDOMINANTES EN EL SECTOR ENERGÉTICO RELACIONADAS CON MUJERES

Entre las líneas de acción y predominio de acciones para el desarrollo de proyectos, generación de fondos o implementación de iniciativas con Estados, organizaciones no gubernamentales y sector privado —y que en algún momento señalan objetivos dirigidos hacia las mujeres—, destacan tres temas: eficiencia energética; derechos humanos y empoderamiento de sectores vulnerables, y Energía y buen gobierno (transparencia, salvaguardas, gestión social y ambiental).

Eficiencia energética

En general, tiene una dirección en que predominan la comunidad y los hogares, tendiente a que el acceso de las familias a energía limpia de fuente confiable y renovable significa, particularmente en áreas rurales, la reducción de una carga considerable que está presente sobre las mujeres, con impacto negativo sobre su salud, educación, posibilidades de acceso a recursos y rol en la comunidad.

Las intervenciones bajo este concepto no tienen como principal objetivo promover la participación

Actores de cooperación y financiamiento involucrados en eficiencia energética¹

IPEEC (por sus siglas en inglés) • La Alianza Internacional para la Cooperación en Eficiencia Energética es una alianza autónoma fundada por las naciones miembros del Grupo de los 8 (G8) en 2009, con el fin de promover la colaboración en materia de eficiencia energética. Entre sus miembros se encuentran 17 países del Grupo de las 20 (G20) economías que representan más del 80% del consumo mundial de energía y más del 80% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GHG, por sus siglas en inglés), (OECD, 2015)². Desde el inicio del IPEEC, sus miembros han

estado trabajando conjuntamente en asociación con otras organizaciones internacionales y entidades privadas, para identificar e implementar políticas que aceleran el despliegue de tecnologías de eficiencia energética, así como las mejores prácticas.

Regatta³ —AECID— Naciones Unidas • Promueve el intercambio de conocimientos sobre tecnologías y experiencias en materia de desarrollo y transferencia de tecnologías para la reducción de sus emisiones de carbono y el desarrollo de su resiliencia climática, para la región de América Latina y el Caribe.

OLADE-Fondo Verde para el Clima⁴

EUROCLIMA-Unión Europea⁵ Promueve la concienciación sobre el cambio climático y cuenta con un programa para ALC e impulsa la propuesta de proyectos en eficiencia energética, que busca identificar y financiar, apoyando el fortalecimiento de capacidades, instituciones, marcos regulatorios de políticas públicas y sistemas de monitoreo que promuevan la eficiencia energética, con una perspectiva regional.

BID, CAF, Sector Privado⁶ A partir de programas de acceso a energía y eficiencia energética, fortalecen los mercados de eficiencia energética y otros instrumentos para impulsar políticas estatales, participación del sector privado y banca local.

IRENA-BANCO MUNDIAL⁷ • Sus acciones se concentran en energía renovable.

GIZ-ALEMANIA⁸

ACDI, Agencia canadiense de Desarrollo Internacional • Canadá ha previsto aumentar y diversificar los mecanismos, para trabajar con el sector privado en apoyo al desarrollo sostenible. Introducirá nuevos instrumentos como las contribuciones reembolsables, que permitirán movilizar nuevas corrientes de financiación para los asociados del sector privado, desatendidos en los países en desarrollo, incluidos los negocios dirigidos por mujeres.

OLADE⁹ • La Organización Latino Americana de Energía tiene una visión clara respecto a las mujeres y el sector ener-

1 En este recuadro no se expresa la totalidad de actores presentes en ALC, se han destacado los que tienen mayor visibilidad actualmente.

2 <<https://ipeec.org/es/cms/4-socios.html>>.

3 <<http://cambioclimatico-regatta.org/index.php/es/>>.

4 <http://www.olade.org/wp-content/uploads/2017/06/GCF_Jessica-Jacob_25May-2017.pdf>.

5 <<http://euroclimaplus.org/index.php/es/>>.

6 <<https://www.iadb.org/es/temas/energia/se4allamericas/inicio%2C17743.html>> <<https://www.caf.com/es/temas/e/energia/>>.

7 <<https://www.youtube.com/watch?v=K9D2bziCGkl>>.

8 <<https://www.giz.de/en/worldwide/32936.html>>.

9 <<http://www.olade.org/sectores/genero-y-energia/>>

gético; en ese marco, promueve las acciones de los Estados: “Cuando hablamos de mujeres pensamos en las tareas que socialmente han sido asignadas a ellas, como los roles de reproducción de las familias y por lo tanto el cuidado diario de su alimento, su salud; en otras palabras, garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar familiar en general. Esa es la realidad que también está presente cuando pensamos la relación con la energía. En el área rural las mujeres están relacionadas con la agrobiodiversidad, la provisión de leña y agua, clasificación de semillas, preparación de alimentos, labores agrícolas en todos los ciclos productivos, almacenamiento de especies, labores culturales (como el control de plagas), crianza de animales (en especial de especies menores), comercialización en mercados locales, medicina tradicional para el cuidado de la familia y en las áreas urbanas, si bien se han incorporado al sector laboral formal o informal, tampoco han dejado de ser responsables de las tareas domésticas, lo que supone largas jornadas de trabajo. En estos emprendimientos y en las tareas diarias el contar con fuentes de energía eficientes y a costos accesibles es fundamental. Esto no siempre es reconocido y valorado por quienes asesoran o elaboran políticas energéticas”.

de las mujeres en las actividades productivas de la familia y la comunidad, su independencia económica y participación efectiva en instancias de decisión como factor de cambio trascendental en las estructuras de la sociedad.

Sin embargo, el acceso de hogares a energía conlleva en algunos casos, mayores posibilidades de independencia económica y hasta de pensamiento para las mujeres. Esto sucede cuando este servicio llega con posibilidades o acciones de formación, organización, diálogo y reflexión sobre la vida de la comunidad y las perspectivas futuras para las mujeres y niñas, que, en conjunto significan el fortalecimiento e impulso de su participación efectiva, liderazgo y rol político activo en instancias de decisión a nivel familiar y de comunidad, instituciones y organizaciones sociales, para el ejercicio de derechos y cambios en la sociedad. Temas que pocas veces son abordados por actores que impulsan proyectos en esta dirección.

Energía, derechos humanos y empoderamiento de sectores vulnerables

En América Latina y el Caribe se planifican y ejecutan un conjunto muy amplio de obras de infraestructura de transporte, energía y proyectos extractivos, que han definido la apertura de territorios al capital internacional para su acceso a recursos naturales.

En ese escenario se involucra la construcción de un paradigma que establece la posibilidad de desarrollo sólo si se alcanza calidad de interconexión de cada país y región con los mercados globales.

El significado de esta lógica mercantil es el desarrollo de una infraestructura especializada, medidas de reglamentación transnacional y un marco político, social, económico y financiero favorable a estas inversiones y al comercio internacional. Este modelo de desarrollo caracterizado por la sobreexplotación de la naturaleza y de la fuerza de trabajo, impacta en la vida de las comunidades y es particularmente violento contra la vida de las mujeres, afectando y transformando las relaciones económicas y sociales en la familia y la comunidad.

Adicionalmente, los efectos relacionados a la situación del planeta debido a los cambios climáticos, exigen respuestas inmediatas y concentrar las preocupaciones mundiales. La deforestación y destrucción de bosques tropicales son señaladas entre las mayores causas de emisión de gases de efecto invernadero.

Si bien se han visibilizado que esfuerzos locales, nacionales e internacionales tuvieron resultados parciales, la tendencia a la devastación se mantiene debido a factores internos y externos concurrentes que tienen que ver con el modelo de desarrollo imperante.

En ese contexto, algunas acciones de la cooperación internacional se dirigen a fortalecer organizaciones sociales y comunidades rurales para el ejercicio de defensa del territorio y sus medios de vida a través de procesos de formación, articulación y

ejercicio de derechos humanos para el empoderamiento de sectores vulnerables; como también para generar diálogo entre afectados y potenciales afectados por intervenciones intensivas de capital e imposición de proyectos.

Actores de cooperación vinculados a intervenciones en energía, derechos humanos y empoderamiento de sectores vulnerables²²:

CAFOD (Catholic International Development Charity), CCFD-Terre Solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement), Christian Aid y otras vinculadas a iglesias²³: Impulsan el conocimiento y formación sobre derechos humanos y la comprensión de la vulneración de derechos territoriales, promoviendo la toma de conciencia sobre el cambio climático.

Fundación Ford, Earth Rights International. Promueven procesos de capacitación para la defensa del territorio y el medio ambiente.

Energía y buen gobierno: transparencia, salvaguardas, gestión social y ambiental

Las políticas públicas y la planificación estatal responden a un modelo de desarrollo, a políticas determinadas que pueden ser definidas en espacios internacionales y nacionales, a un programa político y de gobierno, y a relaciones complejas en las que interactúan diferentes actores con capacidades diferenciadas e intereses diversos, y que llegan a ser determinantes en la definición de la política y el plan.

Al ser expresión del modelo de desarrollo, político, económico y de administración del Estado, reflejan intereses de sectores de poder, profundizando en general la pobreza, la violencia y desigualdad social.

Esta realidad se manifiesta en las permanentes tensiones en la etapa de implementación de esas políticas, disputas plenamente vinculadas al uso de los recursos naturales, pero principalmente a la incompatibilidad de visiones del mundo, teniendo en cuenta que el “desarrollo” no tiene el mismo significado para los impulsores de una mega inversión, ni para el gobierno que busca la renta, menos aún para la población local.

El resultado son los conflictos sociales, la profundización de la desigualdad social, la afectación y luchas por derechos, y problemas ambientales que afectan a la mayoría de la población, y en mayor magnitud a comunidades y poblaciones alejadas de las instancias de decisión.

En ese marco son variadas las intervenciones que buscan reducir los conflictos a partir de promover normas y prácticas en actores estatales, institucionales y empresariales de respeto a derechos humanos; como también impulsan el conocimiento de actores sociales sobre estos mecanismos y/o instrumentos que les permiten el ejercicio de derechos.

Actores:

RFN Rain Forest Norway²⁴ • Organización que se centra en la conservación y protección de bosques tropicales, gobernanza ambiental y derechos indígenas.

Global Green Grants²⁵ • Proporciona pequeños fondos para la conservación del medio ambiente, apoya proyectos ambientales de y para mujeres y cambio climático.

Fundación Moore²⁶ • Provee fondos para la conservación de la Amazonia, prioriza Áreas Protegidas, Territorios Indígenas e investigación.

Fundación Mott²⁷ • A través de las donaciones para programas ambientales centrados en la transformación de la financiación del desarrollo, la Fundación Mott

22 En este recuadro no se expresa la totalidad de actores presentes en ALC, se han destacado los que han tenido alguna relación con los casos descritos.

23 <<https://ccfd-terresolidaire.org/>>.

24 <<https://www.regnskog.no/en/>>.

25 <<https://www.greengrants.org/>>.

26 <<https://www.moore.org/initiative-strategy-detail?initiativeld=andes-amazon-initiative>>.

27 <<https://www.nodoka.co/es/convocatorias/subvenciones-de-la-mott-fundation-para-medio-ambiente-y-finanzas-para-el-desarrollo>>

apoya el trabajo encaminado a abordar las prácticas de quienes financian proyectos del sector energético y de infraestructura, así como las políticas de salvaguarda que protegen a las comunidades locales, pueblos indígenas y los recursos naturales.

Instituciones Financieras Multilaterales • (Banco de Desarrollo de América (CAF), Banco Interamericano de Desarrollo²⁸ (BID) y Banco Mundial), han establecido un conjunto de salvaguardas.

Fundaciones vinculadas a la conservación y Agencias Estatales de Cooperación • KfW, Norad, Moore, World Wildlife Fund (WWF), DEGRA, DGCC, USAID, Rainforest Foundation Norway (RFN), DANIDA, Fondo Vale, han priorizado mecanismos como REDD, la creación, manejo y financiamiento de áreas protegidas, el manejo de territorios indígenas, políticas de conservación y fortalecimiento a actores locales en proyectos de infraestructura.

28 <<https://www.climateinvestmentfunds.org>> <<https://www.bancomundial.org/es/topic/energy/overview>>

BIBLIOGRAFÍA

AGUILAR, Paula Lucía

2011 La feminización de la pobreza: conceptualizaciones actuales y potencialidades analíticas.

CABRIA, Elsa; VILLAGRÁN, Ximena

2019 “Una aldea ve morir su hidroeléctrica” <<https://www.plazapublica.com.gt/content/una-aldea-ve-morir-su-hidroelectrica>>.

CEPAL, OLADE, BID

2017 Eficiencia Energética en Latino América y el Caribe: Avances y oportunidades.

CEPAL

2015 Energía en Centroamérica: reflexiones para la transición hacia economías bajas en carbono.

COLECTIVO MADRE SELVA

2015 ¿Grandes hidroeléctricas ¿beneficio para quién? <https://madreselva.org.gt/?p=965>.

CHRISTIAN AID

Community Managed Solar Electricity Systems save money and build resilience for isolated vulnerable flood-prone communities in the Amazon.

GUZMAN, Juan Carlos; MOLINA, Silvia. CEDLA

2017 Discursos y realidades: Matriz energética, políticas e integración.

INSPIRACIÓN

2015 “Las agujas dan poder”, Brasil <<https://www.inspiration.org/cooperacion/en-brasil-las-agujas-dan-poder/>>.

INTERNATIONAL RIVERS

Represa Chixoy, Guatemala <<https://www.internationalrivers.org/es/campaigns/represa-chixoy-guatemala>>.

MOVIMIENTO DOS ATIGIDOS POR BARRAGENS MAB

- 2013 “Mujeres afectadas. El modelo energético brasileño y la violación de los derechos de las mujeres” <<http://www.mabnacional.org.br/noticia/mujeres-afectadas>>.

MOVIMENTO DOS ATIGIDOS POR BARRAGENS MAB

- 2013 “Las violaciones de los derechos de las mujeres afectadas y la lucha por la vida” <<http://www.mabnacional.org.br/noticia/las-violaciones-los-derechos-las-mujeres-afectadas-y-la-lucha-por-la-vida>>.

NACIONES UNIDAS

- 2019 Informe de los objetivos de Desarrollo Sostenible 2019 <https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019_Spanish.pdf>.

OLADE

- 2013 Informe de Estrategia de Género.

PROGRAMA URBANO, UNITAS, CEDLA

- 2018 Informe Curso Latinoamericano de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales – DESCA, 2018.

TIERRA COLOMBIANA

Hidroituango: El proyecto hidroeléctrico más grande en la historia de Colombia. <https://tierracolombiana.org/hidroituango-proyecto-hidroelectrico-mas-grande-la-historia-colombia/>.

ZAKARA, Rafia

- 2017 El mito del empoderamiento de las mujeres <<https://www.nytimes.com/es/2017/10/10/espanol/opinion/el-mito-del-empoderamiento-de-la-mujer.html>>.

WEBGRAFÍA

<<http://cambioclimatico-regatta.org/index.php/es/>>

<<https://ccfd-terresolidaire.org/>>

<<http://euroclimaplus.org/index.php/es/>>

<<https://ipeec.org/es/cms/4-socios.html>>

<<https://www.bancomundial.org/es/topic/energy/overview>>

<<https://www.caf.com/es/temas/e/energia/>>

<<https://www.caf.com/es/temas/e/energia/>>

<<https://www.climateinvestmentfunds.org>>

<<https://www.iadb.org/es/temas/energia/se4allamericas/inicio%2C17743.html>>

<<http://www.irena.org/>>

<<https://www.giz.de/en/worldwide/32936.html>>

<<https://www.greengrants.org/>>

<<https://www.moore.org/initiative-strategy-detail?initiativeId=andes-amazon-initiative>>

<https://www.nodoka.co/es/convocatorias/subvenciones-de-la-mott-foundation-para-medio-ambiente-y-finanzas-para-el-desarrollo>>

http://www.olade.org/wp-content/uploads/2017/06/GCF_Jessica-Jacob_25May-2017.pdf>

<<http://www.olade.org/sectores/genero-y-energia/>>

<<https://www.regnskog.no/en/>>



**Grupo sobre Política
Fiscal y Desarrollo**

www.cedla.org
info@cedla.org

Achumani, Calle 11, N° 100
entre Av. García Lanza y Av. Alexander
T: 591 2 279 4740 | 591 2 279 9848
C: 8630
La Paz - Bolivia

<https://cedla.org/pfyd>

